

ELECCIONES EN HONDURAS:

UN INTENTO DE INTERPRETACION

Víctor Meza



INTRODUCCION

El tema electoral ha sido y es un tema de permanente discusión en nuestro país, sobre todo en los últimos años cuando ha comenzado a formarse algo así como una incipiente cultura electoral en el seno de la sociedad hondureña.

En efecto, en apenas diez años, entre 1980 y 1989 los hondureños hemos concurrido a las urnas electorales en cuatro ocasiones, la primera vez para elegir la Asamblea Nacional Constituyente y en las tres oportunidades siguientes para escoger el presidente de la República y los diputados al Congreso Nacional. Semejante práctica electoral es totalmente nueva en la historia política contemporánea del país. Su repercusión al interior de la sociedad hondureña es muy grande y contribuye a reforzar el lento y difícil proceso de construcción democrática en Honduras.

El análisis que hoy publicamos, escrito por nuestro Director, y divulgado inicialmente por la Revista Polémica, publicación adscrita a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el número 11 correspondiente a mayo-agosto de 1990, aborda el tema de las elecciones en la década de los años ochenta e intenta una interpretación de sus principales lecciones y significado. Se detiene especialmente en las últimas elecciones, las de noviembre de 1989, en que resultó triunfador el candidato del Partido Nacional, el actual presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas.

Estamos seguros que este documento de análisis contribuirá a ampliar el debate sobre el tema electoral, la naturaleza de los partidos políticos y el comportamiento de la población hondureña en la escogencia de sus dirigentes. Con esa convicción, el Centro de Documentación de Honduras pone en manos de sus lectores y usuarios este Boletín Especial sobre las elecciones en Honduras.

CENTRO DE DOCUMENTACION DE HONDURAS

JULIO 1990

ESPECIAL No. 48

CDH HONDURAS

CENTRO DE DOCUMENTACION DE HONDURAS

Apartado Postal 1882, Tegucigalpa, Honduras

Tel. 32-8486

ELECCIONES EN HONDURAS: UN INTENTO DE INTERPRETACION

Víctor Meza

En la década de los años ochenta, por primera vez en su escabrosa historia política, los hondureños asistieron a las urnas electorales en cuatro ocasiones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente en 1980 y tres presidentes constitucionales de la República en 1981, 1985 y 1989.

Este es un hecho nuevo y sorprendente, sobre todo si se produce en un país como Honduras en donde la práctica electoral ha sido una excepción como fórmula de funcionamiento en el sistema político. El golpe militar, el tutelaje castrense o el fraude electoral amañado e impuesto -las célebres "elecciones estilo Honduras"- han sido la norma y el procedimiento favorito de las élites políticas y militares hondureñas para dirimir o arbitrar sus conflictos y tensiones sociales.

Pero quizás lo más importante en todo este proceso de creación de una cultura electoral, es el alto grado de credibilidad y, en consecuencia, de legitimidad, que progresivamente han ido ganando los torneos electorales en la década de los años ochenta. El cuestionamiento y la impugnación, que antes constituían los mecanismos clásicos en manos del partido perdedor, poco a poco han cedido su lugar a la aceptación caballerosa y el diálogo civilizado entre vencedores y vencidos. De esta forma, la práctica electoral se va convirtiendo en cultura y sienta las bases para un proceso más firme y coherente de democratización política de la sociedad hondureña. Y así, el sistema político en su conjunto se vuelve más fluido y tolerante y, por lo mismo, más efectivo en sus pretensiones de regular con lógica consensual el laberinto de tensiones y roces de la estructura social del país.

Pero, por supuesto, este proceso no se produce en el vacío ni obedece a factores o presiones puramente externas al cuerpo social hondureño. Sin negar la influencia por demás evidente de tales factores y presiones, es preciso buscar las raíces en la historia misma de la sociedad hondureña y en los

antecedentes inmediatos a la crisis del modelo de dominación autoritaria impuesto por la Fuerzas Armadas de Honduras a mediados de la década de los años setenta.

Este modelo, cuyo punto de partida es el fracaso del proceso reformista y modernizante que los militares iniciaron a finales de 1972 y prolongaron hasta comienzos de 1975, fue entrando gradualmente en una etapa de inmovilismo y repliegue hasta que hizo crisis definitiva en las postrimerías de esa década y desembocó, de manera casi irremediable, en el primer proceso electoral de los años ochenta.

A fin de asegurar una transición controlada que asegurara el paso vigilado de los gobiernos de facto de los setenta a los gobiernos constitucionales de los ochenta, era preciso abrir el espacio vital para que los partidos políticos hondureños -el Liberal y el Nacional especialmente- pudieran volver a insertarse en el juego del sistema, con garantías y posibilidades reales de existencia libre.

Esa revitalización de los dos principales partidos y la discreta tolerancia ante el surgimiento de otras agrupaciones políticas, fueron las condiciones indispensables para poner en marcha las nuevas reglas del juego y dar inicio al proceso de democratización formal que ha marcado la historia hondureña en la década pasada.

El resurgimiento de los dos partidos políticos tradicionales y su emergencia impetuosa en el escenario de la política nacional, constituyeron de alguna manera un rotundo mérito a la poco afortunada afirmación de un vocero castrense en pleno auge del autoritarismo militar, quien llegó a calificarlos como "cascarones vacíos", entidades sin respaldo en la opinión pública, desgastadas por la historia y rechazadas por la que otrora fuera su base electoral.

Los hechos y la historia demostraron que las cosas eran diferentes. Los partidos políticos tradicionales apelaron a sus profundas raíces rurales y dieron nueva vida a los viejos métodos del paterna-

lismo y el clientelismo políticos en los que desde siempre habían basado la red de cacicazgos rurales que alimentaban sus estructuras y aseguraban su funcionamiento como maquinarias de movilización electoral entre la población hondureña.

Pero al tiempo que resurgían y recuperaban las viejas energías acumuladas y reprimidas durante el largo período de los gobiernos militares -reformistas o conservadores, autoritarios o tolerantes-, los partidos políticos tradicionales también experimentaban cambios internos y expresaban, de una u otra manera, en algunos casos con mayor profundidad que en otros, las impostergables urgencias de su propia modernización y acoplamiento con el nuevo clima político que el sistema exigía e inauguraba.

Este proceso de cambios al interior de los partidos políticos tradicionales, así como el reconocimiento de dos nuevas organizaciones políticas -el Partido de Innovación y Unidad en 1978 y la Democracia Cristiana en 1980-, son elementos clave para entender las características de los procesos electorales de los años ochenta y la naturaleza del sistema político en cuyos límites se han desarrollado.

A la creciente reactivación de los partidos políticos y al innegable reavivamiento del ambiente político nacional se contraponen, como condición necesaria y también inevitable, el lento pero efectivo repliegue de los militares hacia la autonomía relativa de sus cuarteles. Su papel ha ido evolucionando lentamente desde las primeras fases del protagonismo gubernamental en la década de los setenta hasta un alejamiento discreto y vacilante del escenario político a finales de los años ochenta, no sin antes pasar y detenerse en el intervencionismo altanero y despótico de los primeros años de la década de los ochenta cuando el entonces General Gustavo Alvarez Martínez impuso un régimen de terror y violencia inspirado en una visión primaria y descabellada de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Pero la tendencia democratizadora, a pesar de los escollos y contratiempos evidentes, se ha mantenido y continúa afirmándose. Los resultados de las más recientes elecciones -las del 26 de noviembre de 1989-, así lo demuestran.

Características y tendencias de los procesos electorales en Honduras en la década de los años ochenta.

Los cuatro procesos electorales que han tenido lugar en Honduras entre 1980 y 1989, aunque tienen diferencias importantes en su concepción y objetivos inmediatos, no hay duda que también presentan rasgos comunes y elementos genéricos que permiten diseñar sus principales

tendencias y características.

En *primer lugar*, es necesario señalar que a lo largo del período se observa un nivel de participación constante de la población electoral en el desarrollo de las votaciones. El índice de abstencionismo se mantiene en equilibrio similar en los cuatro torneos electorales, con la notable excepción del último cuando el porcentaje de abstención subió en ocho puntos con respecto a la elección anterior. Sin embargo, esta circunstancia puede tener una explicación concreta: las reiteradas y firmes amenazas penales contra los extranjeros documentados y registrados en el censo electoral ilegalmente, que pretendieran ejercer el voto, fueron un factor disuasivo muy importante que redujo a su mínima expresión la participación fraudulenta de nacionales de otros países (algunos "Contras" nicaragüenses y refugiados en general) en las elecciones de noviembre de 1989.

Los porcentajes de abstención en los cuatro procesos electorales son los siguientes: 18.2% en 1980 cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente; 17.2% en 1981 cuando resultó electo presidente el liberal Roberto Suazo Córdova; 16% en 1985 cuando se eligió al también liberal José Azcona Hoyo, y 24% en 1989 al ganar las elecciones el nacionalista Rafael Leonardo Callejas. Estas cifras evidencian un porcentaje de abstención relativamente bajo en comparación con los promedios regionales y latinoamericanos.

Al mismo tiempo indican una cierta "vocación electoral creciente", sobre todo entre la población juvenil que cada vez se integra e incorpora más a las campañas electorales de los partidos políticos y, lo que es más importante, al trabajo postelectoral en las áreas de organización y educación de las filas partidarias.

En *segundo lugar* habría que señalar el hecho de que por primera vez en la historia electoral hondureña participan, además de los clásicos partidos tradicionales liberal y conservador, dos nuevas agrupaciones políticas que responden a las características de partidos organizados y estables, a diferencia de los llamados "partidos de coyuntura" que han surgido en otros momentos de la historia política nacional y cuya vida ha sido tan efímera como escasa su importancia política. Estos dos nuevos partidos, el de Innovación y Unidad que hoy se reclama y apellida social demócrata (PINU-SD) y el Demócrata Cristiano (PDCH), alteran con su sola presencia la forma tradicional del cuadro bipartidista político pero, aunque parezca paradójico, no lo rompen ni lo subvierten por la base sino que, con su participación, lo fortalecen y legitiman como veremos más adelante.

El comportamiento electoral de los dos nuevos partidos evidencia una estabilidad relativa matizada por altibajos muy notorios en su capacidad para

captar los votos de los electores. Sin embargo, la tendencia básica de su participación está signada por la imposibilidad de crecimiento efectivo y, en el caso de la Democracia Cristiana en las últimas elecciones, por un declive creciente. Veamos en cifras la evolución electoral de ambos partidos: en 1980 el PINU acumuló 35,263 votos lo que significó el 3.5% del total de sufragantes. La Democracia Cristiana no participó porque aun no había recibido el reconocimiento legal del Estado. En 1981 el PINU tuvo un ligero descenso y sólo recibió 29,419 sufragios (2.4%) mientras la DC obtuvo 19,163 votos (1.6%); en las segundas elecciones presidenciales, las de 1985, el PINU siguió descendiendo y recibió únicamente 23,709 votos (1.4%) mientras la DC elevó su votación hasta 30,258 votos (1.9%). En las recientes elecciones de noviembre de 1989 la tendencia se invirtió y el PINU, ahora aliado con un minúsculo partido social demócrata del que tomó su apellido, logró su más alta votación de la década y alcanzó los 33,952 votos, o sea el 1.8% del total. La DC, por su parte, apenas pudo reunir 25,423 votos, es decir el 1.4% de la población electoral que ejerció el sufragio.

La escasísima fuerza electoral de los dos nuevos partidos políticos muestra una cierta petrificación de la sensibilidad política de los electores frente a un nuevo discurso más caracterizado por el mensaje doctrinario que por la prédica tradicional y demagógica.

Como elemento digno de mención, en *tercer lugar*, se debe señalar que la lógica de los procesos electorales muestra una marcada tendencia, sobre todo después de las primeras elecciones presidenciales, al ascenso del poderío electoral del partido perdedor, o sea el Nacional, y el consecuente desgaste y pérdida de votos por parte del partido ganador, en este caso el Liberal.

Las estadísticas muestran que mientras en 1981, los liberales obtuvieron 636,653 votos, es decir el 52.4% de la población electoral que acudió a las urnas, en 1985 los 786,603 votos obtenidos sólo representaban ya el 49.2% del electorado. En las últimas elecciones de 1989 fue peor: bajó incluso el total de votos recibidos con respecto al torneo electoral anterior y sólo alcanzó la suma de 776,983 votos, es decir apenas el 43.1% de los sufragios depositados, siendo esta la primera elección que perdió el Partido Liberal en la década comentada.

La tendencia se invierte en el Partido Nacional y se encamina por la vía de la recuperación y el ascenso. En 1981 los nacionalistas recibieron 491,392 votos lo que equivale al 40.5% del total depositado. Cuatro años después, en las elecciones de 1985 su capital electoral subió a 701,440 o sea el 43.9% y en las recientes elecciones de 1989 recibieron 917,168 sufragios lo que en términos porcentuales significó el 50.9% de la población votante y dió como resulta-

do la primera victoria del Partido Nacional en las cuatro elecciones de la década.

El creciente deterioro del volumen electoral de los liberales no puede explicarse simplemente por la vía del desgaste que produce el ejercicio gubernamental, sobre todo en un período de aguda crisis económica y convulsión política regional. Hay otras causas con igual o menor importancia que esta. De igual manera no se puede entender el ascenso nacionalista como la expresión de un beneficio político derivado por el hecho de ser partido de oposición y capitalizar a su favor los desaciertos y yerros del partido gobernante.

No hay duda que las dos tendencias opuestas que muestran las estadísticas electorales están relacionadas con cambios profundos que empezaron a tener lugar en el seno de los dos partidos tradicionales, pero especialmente dentro del Partido Nacional. Esos cambios tienen que ver con los esfuerzos de sus cúpulas dirigentes por introducir la modernización política al interior de sus organizaciones y remozar gradualmente el viejo sistema de caciques rurales y paternalistas sobre los cuales habían basado en gran parte su existencia orgánica. La modernización en los métodos y en las estructuras terminó finalmente dando sus frutos y favoreció al partido que mayores logros había alcanzado en ese recorrido, el Partido Nacional.

La contraposición de las dos tendencias mencionadas ha contribuido también a favorecer el libre juego democrático y la alternancia en el ejercicio del poder gubernamental. Las tres victorias consecutivas de los liberales debilitaban la credibilidad de los procesos electorales y generaban desaliento y desconfianza en las filas de los otros partidos políticos. En cambio, el triunfo arrollador de los nacionalistas en 1989 fortaleció la legitimidad del sistema político y dió nuevo valor a la importancia del voto como instrumento de castigo o sanción en manos de los electores, es decir de los gobernados, frente a los gobernantes. Los electores hondureños comprendieron mejor la posibilidad de acceder al gobierno por la vía de las urnas y arrebatarse los mecanismos institucionales del poder de las manos del adversario político. El hecho histórico trascendental de que por primera vez en la postguerra un presidente liberal entregara pacífica y legalmente el poder presidencial al candidato nacionalista vencedor, sin que fuera precisa la intervención arbitral, solicitada o no, de los militares, es un hecho que reviste una gran importancia para la consolidación de un sistema político estable y un proceso de democratización en desarrollo.

Por último, aunque no menos importante, hay que señalar en *cuarto lugar* otro elemento que ayuda a caracterizar mejor los procesos electorales de los años ochenta en Honduras. Se trata, no hay duda, de la innegable tendencia que se mantiene y ligera-

CUADRO No.1
HONDURAS: RESULTADOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES
DE LA DÉCADA DEL OCHENTA. CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS

	1980	%	1981	%	1985	%	1989	%	CRECIMIENTO ACUMULADO 1980-89
INSCRITOS:									
P L	495.779	49.6	636.653	52.4	786.603	49.2	776.983	43.1	281.204
P N	423.263	42.4	491.392	40.5	701.440	43.9	917.168	50.9	493.905
PINU	35.263	3.5	29.419	2.5	23.709	1.4	33.952	1.8	-1.311
D C			19.163	1.6	30.258	1.9	25.423	1.4	6.260
BLANCOS	19.847	1.9	17.430	1.5	28.115	1.8	18.483	1.0	
NULOS	24.221	2.4	17.326	1.5	27.616	1.8	27.107	1.5	
TOTAL	998.522		1,214.923		1,597.801		1,799.126		

FUENTE: Tomado de Navarro, Julio. "La Década Electoral: de la Tradición a la Ruptura", Revista de Ciencias Sociales, Puntos de Vista No. 2, marzo de 1990, CEDOH, Tegucigalpa, Honduras.

mente se incrementa en favor del fortalecimiento y consolidación del bipartidismo en el sistema político hondureño. En otras palabras, esto quiere decir que los cuatro procesos electorales de la década refuerzan y revitalizan a los dos partidos principales que han sido los protagonistas históricos de la política hondureña durante todo el siglo.

A pesar del ingreso de los dos nuevos partidos y no obstante el innegable crecimiento de las organizaciones del denominado movimiento popular a lo largo de los últimos diez años, la tendencia electoral evidencia el reforzamiento de los dos partidos tradicionales en las preferencias de la población electoral. Las cifras y los porcentajes no dejan lugar a ninguna duda: En 1980 ambos partidos sumaron el 92% de los votos frente al 3.5% del PINU; al año siguiente los votos conjuntos de liberales y nacionalistas alcanzaron el 92.9% mientras el PINU bajaba al 2.4% y la DC obtenía apenas el 1.6% del total de votos depositados. La tendencia continuó en 1985: los dos partidos históricos mantuvieron su porcentaje conjunto en 93.1%, el PINU cayó a un insignificante 1.4% y la DC sostuvo un 1.9%. Finalmente, en las pasadas elecciones de 1989, los dos partidos grandes subieron al 94%, el PINU llegó al 1.8% y la DC quedó en 1.4%.

La confirmación del bipartidismo político en Honduras podría tener un doble significado. Por un lado muestra que los dos partidos nuevos, el PINU y la DC, aun no han logrado penetrar y crear un auditorio político sensible a su discurso doctrinario. El atraso del mundo político hondureño, la rigidez de sus códigos de comunicación política y la propia debilidad estructural de las nuevas agrupaciones políticas conspiran para frenar su desarrollo y dificultar su crecimiento. Pero, por otro lado, también puede evi-

denciar los frutos que han producido los cambios y los esfuerzos de modernización al interior de los dos partidos históricos, sobre todo los que han tenido lugar en el seno del Partido Nacional. Más adelante volveremos sobre este aspecto del problema ya que sin una interpretación debida del mismo no es posible entender lo que ha pasado y está pasando en el sistema político hondureño durante los últimos años.

Lecciones y elecciones de 1989

El domingo 26 de noviembre de 1989 los hondureños asistieron a las urnas por cuarta vez en diez años para elegir un presidente de la república, tres designados (vicepresidentes), 128 diputados y autoridades municipales para 289 alcaldías. Aunque participaban cuatro candidatos presidenciales, sólo dos, el nacionalista Rafael Leonardo Callejas y el liberal Carlos Flores Facussé, tenían posibilidades reales de triunfo.

A pesar que las encuestas favorecían por igual a ambos candidatos y manipulaban a su gusto los datos y las cifras, el sentimiento general se inclinaba por la victoria de Callejas, en un mal desimulado rechazo a los ocho años de administración liberal y como manifestación del creciente descontento ante la ineficiencia gubernamental para manejar la grave crisis económica en que se encuentra el país. Los resultados sorprendieron a muy pocos: Callejas obtuvo la mayor votación registrada por candidato alguno en la década -917,168 votos equivalentes al 50.9% del total- frente a Flores que, con los 776,983 votos recibidos, sólo pudo alcanzar el 43.1%, llevando a su partido, el Liberal, a la derrota electoral más estrepitosa que haya sufrido desde su fundación a

finales del siglo pasado.

Pero no sólo eso. El Partido Nacional, además de convertir a su candidato en presidente, obtuvo también la mayoría parlamentaria en el Congreso Nacional al ganar 71 curules frente a 55 del Partido Liberal y 2 del PINU-SD. También obtuvo el control de la mayoría de las municipalidades del país, 212 frente a las 77 restantes en manos de los liberales. Nunca en la historia política hondureña de la post guerra un partido político había logrado un control tan amplio de la estructura gubernamental como resultado de un proceso electoral limpio y plenamente legitimado.

Las razones que explican la victoria aplastante de los nacionalistas y la derrota de los liberales son muchas y variadas. Sin embargo, es necesario analizar aquellas que aparecen como más importantes para comprender el significado del resultado electoral y el alcance de las lecciones que encierra.

El desgaste de los liberales

Es indudable que después de ocho años ininterrumpidos de gobiernos liberales, el partido gobernante debía sufrir un desgaste natural, cierto agotamiento de sus reservas políticas y una reducción sensible de sus campos de maniobra para concertar y mantener alianzas políticamente provechosas con algunos sectores de la oposición.

A esto habría que sumar las graves repercusiones de la crisis política y militar de la región centroamericana sobre las frágiles estructuras de la sociedad hondureña. Los miles de refugiados de los países vecinos, especialmente salvadoreños y nicaragüenses, que buscaron asilo temporal en territorio hondureño así como la presencia permanente desde 1981 de miles de contrarrevolucionarios antisandinistas -los Contras- que llegaron a ocupar militar y civilmente una amplia franja del territorio nacional en la zona fronteriza con Nicaragua convirtiéndola en teatro de guerra y zona de exclusión para los pobladores hondureños del área. Como corolario a esta situación anormal e irritante, la estrecha alianza política y militar de los gobiernos liberales con la Administración Reagan en sus dos períodos de gobierno, convirtió a Honduras en un apéndice de la política norteamericana y colocó al país al borde de la guerra con Nicaragua y en abierta confrontación con los insurgentes salvadoreños, además de transformar el territorio nacional en un gigantesco campo de entrenamiento militar para las tropas norteamericanas que realizaron entre 1981 y 1989 más de un centenar de ejercicios militares entre operaciones combinadas de pequeña escala y maniobras conjuntas de grandes dimensiones.

Todos estos hechos, sumados a la aguda crisis económica y social del país, fueron generando una sensación de hastío entre la población con respecto

a las administraciones liberales. En el ambiente político hondureño se percibía la necesidad de un cambio que abriera perspectivas diferentes o que al menos diera oportunidad a un nuevo liderazgo político para mostrar su capacidad en la conducción del Estado. No es casual que el lema principal de la campaña electoral del Partido Nacional fuera precisamente ese: "Un cambio para mejorar".

La idea del "voto castigo", del sufragio como instrumento de sanción frente a una política que muchos consideraban errada, fue tomando fuerza en amplios sectores del electorado hondureño y se tradujo en acción concreta el día de las elecciones.

RESUMEN DE ELECTORES POR DEPARTAMENTO 1989

ATLANTIDA	128.385
COLON	74.659
COMAYAGUA	122.930
COPAN	115.835
CORTES	367.456
CHOLUTECA	153.259
EL PARAISO	131.109
FRANCISCO MORAZAN	463.879
GRACIAS A DIOS	14.803
INTIBUCA	57.388
ISLAS DE LA BAHIA	12.710
LA PAZ	53.653
LEMPIRA	83.773
OCOTEPEQUE	41.164
OLANCHO	136.973
SANTA BARBARA	144.791
VALLE	67.811
YORO	177.277

TOTAL GENERAL	2,347.855
----------------------	------------------

FUENTE: Tomado de Tribunal Nacional de Elecciones

La organización de los nacionalistas

Pero el desgaste del Partido Liberal a través de su ejercicio gubernamental no explica por sí solo el resultado de las elecciones de 1989. Ese proceso de desgaste debió complementarse con otro factor de indudable importancia -la nueva organización del Partido Nacional - para producir la debacle electoral del liberalismo y la impetuosa irrupción de los nacionalistas como nueva fuerza hegemónica en la política hondureña.

Mucho se ha hablado de la impresionante maquinaria organizativa que el Partido Nacional puso en funcionamiento durante la campaña electoral de 1989. Sin embargo, el elogio admirado ante la tecnología de las computadoras o la sobreestimación

simplista de las habilidades gerenciales de tal o cual dirigente, no sirven más que para ocultar los hilos profundos del proceso de modernización interna a que ha estado sometido el partido desde mediados de los años ochenta y cuyo resultado más tangible e inmediato fue una mayor capacidad de organización y por lo tanto de movilización nacional para ganar las elecciones de 1989.

Los procesos de modernización y democratización internas siguieron caminos distintos en ambos partidos y alcanzaron grados diversos de profundidad y éxito. También produjeron resultados diferentes. Mientras la modernización metodológica fue la principal preocupación de los nacionalistas, los liberales concedieron mayor importancia al proceso de democratización interna. Mientras la modernización condujo a elevar el nivel técnico de sus métodos organizacionales en el Partido Nacional, la democratización acelerada y caótica llevó a la dispersión y el fraccionamiento de las filas liberales. Ambos procesos afectaron en diverso grado la red de cacicazgos rurales que sobrevivían en la base de la estructura partidaria y condujeron en diferente nivel de profundidad a sentar otras bases para un liderazgo urbano de nuevo tipo.

El peso del caciquismo en el seno de los partidos tradicionales era un freno poderoso que impedía la necesaria modernización partidaria. Los partidos marchaban a la zaga con respecto a la modernización de otras instancias y estructuras de la sociedad. Se habían convertido en organismos disfuncionales con respecto al papel que debían desempeñar como instancias intermediarias o mecanismos de representación en el entramado social.

Los dos partidos tradicionales funcionaban, al decir de un autor, como "clanes de caciques que giran bajo un cabecilla principal o capo, cuya característica esencial es la de tener una personalidad fuerte. Son hermandades de caudillos que operan de acuerdo con un código social tradicional de fidelidad personal... El partido tradicional es una estructura muy primitiva, que surgió de las también primitivas estructuras económicas y relaciones sociales del siglo pasado. Así, la agrupación política resulta ser un pacto entre señores o, para usar el término campesino con que se caracteriza a los caudillos locales, una alianza de "empautados", una especie de asociación mafiosa que multiplica el poder mágico de los cabecillas y garantiza protección a sus clientes, un "pauto" que institucionaliza en la dimensión política el poder económico del que gozan los signatarios".(1)

En la medida que la sociedad avanzaba lentamente por el camino de la modernización económica y social, al mismo tiempo que se aceleraba un deformado pero real proceso de urbanización primaria, los partidos tradicionales experimentaban con mayor ansiedad y creciente urgencia la necesidad



El candidato ganador

ineludible de transformarse por dentro. Y esto es así porque "una vez que se ha puesto en marcha el proceso de modernización, por su naturaleza crea fuerzas sociales que quedan fuera de la esfera de influencia de los caciques, al tiempo que resta fuerza a los vínculos y apoyos del cacicazgo... Las fuerzas sociales nuevas se tornan disolventes o disgregadoras del sistema por el hecho mismo de quedar marginadas. El caciquismo sigue vigente pero ya no funciona".(2)

En el caso específico del Partido Liberal, por tener un asentamiento más sólido y prolongado en las zonas urbanas y en el sector de los trabajadores agrícolas bananeros del norte del país, la necesidad de debilitar y eventualmente suplantar la red de cacicazgos rurales cedió en importancia ante la urgencia por democratizar sus estructuras funcionales internas y aprobar códigos políticos que regularan e institucionalizaran el libre juego y la

competencia abierta entre los diferentes líderes, generalmente urbanos, que aspiraban a dirigir el aparato partidario. El procedimiento de las elecciones internas, aprobado y puesto en marcha en la década de los años ochenta, actuó como un mecanismo democratizador disfuncional que, al no encontrar el terreno institucional y cultural-político apropiado, produjo resultados diferentes a los esperados. El partido sufrió un estremecimiento colosal que lo hizo fraccionarse en múltiples tendencias y movimientos, algunos de existencia efímera por su concepción puramente electoralista, otros más permanentes con grados diversos de coherencia doctrinaria y orgánica. La diversidad de corrientes no fue exactamente la expresión de un libre juego ideológico al interior del partido. Fue, antes bien, la manifestación más directa de la incapacidad de un partido tradicional para transitar hacia su propia democratización por la vía artificial y apresurada de las elecciones internas. Un fracasado intento por alcanzar la democratización del partido sin llevar a cabo antes o en forma paralela su urgente modernización.

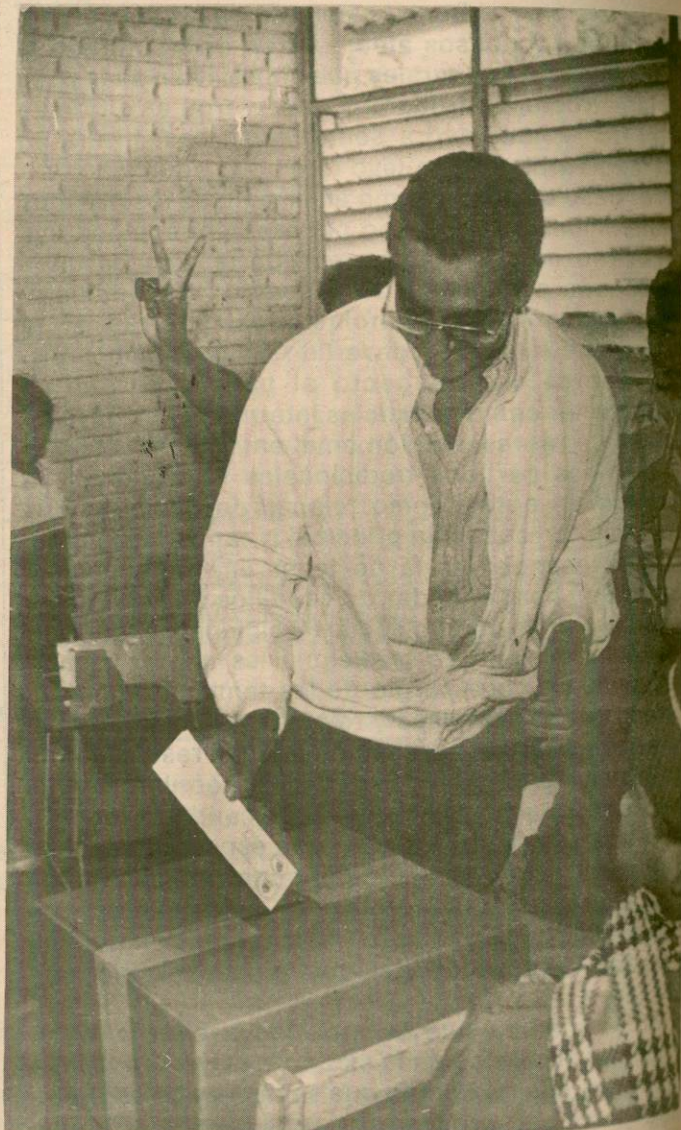
Con el Partido Nacional las cosas sucedieron al revés. En la primera mitad de los años ochenta, pero sobre todo a partir de 1986 cuando Rafael Leonardo Callejas se convierte en presidente de su Comité Central, da comienzo y se intensifica un sostenido proceso de modernización y tecnificación del aparato partidario. Ante la imposibilidad real de introducir un nuevo pensamiento político en la vieja estructura del partido, Callejas y su equipo se deciden a introducir un nuevo método de organización y control. Al no poder trabajar en el vacío ideológico de los caciques, la corriente renovadora de Callejas concentra sus esfuerzos en la remodelación metodológica del aparato. A la falta de ideas contraponen la abundancia del método. Frente a la ausencia de democracia interna despliega la modernización avasalladora. La técnica, instrumento privilegiado para decorar e impulsar el proceso modernizador, sustituye gradualmente al proselitismo artesanal de los caciques.

En poco tiempo el impulso modernizador de Callejas se traduce en el ascenso a la cúpula y su posterior consolidación dentro del aparato partidario, de un nuevo liderazgo urbano empresarial que va sustituyendo con precisión y cálculo gerenciales a los viejos y desfasados caciques rurales que no acaban de comprender la razón última por la que una computadora inspira más confianza que sus viejos y artesanales cálculos clientelistas. (3)

Pero esta modernización no elimina a los caciques. Los relega al mismo tiempo que los atrae y coopta. Los subordina a la vez que los utiliza. Rechaza sus propuestas pero también los eleva a la categoría de vieja guardia histórica. Es una modernización sin dolores o, al menos, con muy poco sufrimiento.

La tecnificación del aparato partidario elevó sustancialmente el poder movilizador del Partido Nacional, a veces en grado mucho mayor que al propio poder de convocatoria del partido. La nueva disciplina gerencial introducida por el liderazgo callejista revolucionó la vieja disciplina basada en la lealtad personal de los caciques y generó sistemas de coordinación precisa y mecanismos de movilización exactos en el tiempo y en el espacio de la escena política hondureña. Como consecuencia inmediata y directa, los nacionalistas obtuvieron su más resonante victoria electoral en lo que va de este siglo.

Por el momento el esfuerzo modernizador del equipo callejista ha producido muy buenos resultados. Pero son resultados electorales. Ahora hace falta completar la modernización metodológica con la indispensable democratización política. Esa será una tarea más ardua y prolongada. Sus efectos no



El candidato perdedor

se verán a corto plazo ni se medirán en términos cuantitativos o en número de votos. Pero inevitablemente deberá ser cumplida para poner al partido en la sintonía necesaria con el nuevo discurso político de su actual presidente.

El discurso de los candidatos

En el transcurso de la campaña electoral a menudo los votantes lucían confundidos y escépticos. Parecía que los candidatos se habían robado mutuamente los discursos. El aspirante liberal, Flores Facussé, deambulaba retóricamente en los lugares comunes de la prédica tradicional y personalista, carente de conceptos o ideas clave que permitieran conocer la esencia de su pensamiento. Su discurso sonaba muy conservador. Callejas, en cambio, lucía más coherente y exhibía un mejor conocimiento de los principales problemas del país. Su discurso tenía un sabor más liberal que conservador. Aparecía como lo que es: un político moderno.

Las ideas de Callejas, cautelosamente ancladas en el neoliberalismo económico, junto a su visión antiestatizante y "librepresarial", muy pronto encontraron eco entre muchos de los gremios y cámaras de los hombres de negocios que vieron en el candidato nacionalista al político de nuevo tipo que estaban esperando. De ahí a concederle su apoyo material y político sólo fue un paso. (4)

Al momento de conformar su gabinete de gobierno, el recién electo presidente Callejas tuvo especial cuidado para no defraudar a sus patrocinadores. Incluyó en el llamado "gabinete económico", la instancia más influyente dentro del poder ejecutivo, a conocidos funcionarios y técnicos de las cámaras empresariales y de la poderosa Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados Unidos. El discurso neoliberal de la campaña, cuidadoso y prudente entonces, apareció ahora hecho praxis política concreta.

Pocos días después de haber cumplido su primer mes de gobierno, agobiado e incrédulo ante la imposibilidad real de articular un pacto social basado en la concertación nacional, concepto clave en su campaña electoral, Callejas se decidió a presentar ante la nación su nuevo plan de ajuste económico pomposamente denominado Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía, un conjunto de medidas económicas que comprenden desde la creación de nuevos impuestos y la elevación de los precios hasta la virtual devaluación del lempira que ahora tiene un valor oficial de cuatro por uno. En esencia, un plan de ajuste exigido desde hace mucho tiempo por los organismos financieros internacionales como condición indispensable para permitir a Honduras volver a ser sujeto de crédito en el mercado financiero mundial.

Las nuevas medidas adoptadas por el equipo

callejista y su reiterada insistencia en reducir y descentralizar el Estado así como en privatizar la mayoría de las empresas públicas, demuestran una vez más el divorcio profundo que existe entre el discurso del líder y el pensamiento de sus bases. El propio Callejas advierte este desfase y lo resiente. Ya no tiene el viejo poder atrayente y casi mágico sobre los miles de nacionalistas del campo y la ciudad que lo aclamaron y eligieron. Tampoco su partido es capaz de mostrar la misma eficacia movilizadora de antaño. Modernizar el partido es tarea más fácil que modernizar el país. Democratizar a ambos es tarea infinitamente más difícil.

La impresionante victoria electoral de noviembre de 1989 ha empezado a mostrar sus límites en el primer trimestre de 1990.

¿Y los militares qué?

El triunfo electoral de Callejas se produjo en un momento de extraordinaria importancia para la historia mundial. El resquebrajamiento de los regímenes autoritarios y stalinistas de la Europa del Este junto al proceso de transformaciones y cambios que se están llevando a cabo en la Unión Soviética, contribuyen de manera fundamental a crear un clima de verdadera distensión internacional y obligan a una recomposición de las relaciones mundiales de poder.

La repercusión de estos cambios en el área centroamericana todavía es un tanto incierta. Sin embargo, no se puede negar que su influencia ha comenzado a hacerse sentir y está creando un nuevo ambiente favorable a la negociación política como alternativa frente al choque armado.

En estas circunstancias el papel de los militares debe ser revalorado. Su importancia local no puede ser la misma y su función principal tiene que ser redefinida de acuerdo a la nueva situación creada o por crear.

El papel injerencista de los militares hondureños en el espacio político de los civiles se amplió o se redujo en dependencia de los vaivenes que experimentaba la crisis política y militar de la región. Su rol arbitral y el tutelaje ejercido sobre las instituciones civiles debilitaban y debilitan los impulsos propios del proceso de democratización política de la sociedad hondureña. Su crecimiento y desarrollo se producían a costa del paulatino debilitamiento o de la parálisis de las fuerzas civiles que animan la democratización.

Al surgir un nuevo clima de distensión que anule o limite las opciones de la guerra en Centromérica, la influencia de los militares sobre el aparato civil tiende a reducirse. Si desaparecen los Contras, por ejemplo, los militares pierden también un área importante de influencia en la que siempre han conservado el derecho no escrito a la decisión final. Si los refu-

glados se van, entonces ya no hay que consultar con las Fuerzas Armadas la política que se debe seguir frente a éstos. Y así en muchos otros espacios del escenario político.

Es claro que las cosas no son tan fáciles como podrían parecer. Hay y habrá resistencia castrense ante la mínima posibilidad de que el poder de las Fuerzas Armadas se reduzca. Incluso hay peligros mayores. Se corre el riesgo de que, al quedarse sin enemigo visible ni aliados totalmente seguros, los militares más conservadores y represivos se inventen nuevos adversarios y adopten fórmulas contrainsurgentes ante la población civil. La búsqueda de nuevos enemigos los podría conducir ante los civiles. La democratización y el fortalecimiento de los partidos políticos podrían convertirse en el nuevo desafío a enfrentar en tanto que significan ampliación inevitable de los límites del poder civil. Son hipótesis peligrosas pero podrían ser realidad.

Por supuesto, para que se produzca realmente una disminución importante del tutelaje militar es necesario que exista el esfuerzo complementario desde la sociedad civil. Los partidos políticos, por ejemplo, al avanzar en su proceso de modernización

y democratización pueden gradualmente ir ampliando la esfera de sus propias posibilidades y asumir funciones de representación e intermediación que antes monopolizaban los hombres de uniforme.

La discusión amplia y abierta sobre la necesidad de reducir el gasto militar y disminuir el tamaño del ejército ha ocupado las páginas de los periódicos hondureños en el primer trimestre de 1990. Eso es un buen síntoma. Antes el tema del presupuesto militar era considerado tabú. Muy pocos se atrevían a airearlo públicamente. Hoy, sin embargo, se percibe un nuevo despertar de la conciencia civil frente a la cuestión castrense.

Callejas asume la presidencia en un momento histórico que le permite ampliar los límites del poder civil a costa del espacio injerencista de los militares. Si lo hace habrá realizado un aporte fundamental a la democratización de la sociedad hondureña y a la consolidación de sus instituciones civiles. Por el contrario, si no lo hace ni lo intenta, habrá perdido una oportunidad única en la vida política del país.

Tegucigalpa, marzo de 1990

C I T A S

(1) Pastor, Rodolfo. "El ocaso de los cacicazgos: historia de la crisis del sistema político hondureño", Boletín especial No. 21, pág. 9, febrero de 1986, CEDOH, Tegucigalpa, Honduras.

(2) Ibid, pág. 10

(3) El cuadro estadístico de las elecciones de 1989 muestra con gran claridad el ascenso del Partido Nacional y el correspondiente descenso del Liberal en los principales centros urbanos del país. Mientras en las elecciones presidenciales de 1981 los liberales ganaron ampliamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los dos centros urbanos más grandes de Honduras, en 1989 los nacionalistas se alzaron con la victoria en ambos. Para un mejor

estudio de este fenómeno, véase el interesante artículo de Julio Navarro, "La Década Electoral: de la Tradición a la Ruptura", Revista de Ciencias Sociales, Puntos de Vista, No.2, marzo de 1990, CEDOH, Tegucigalpa, Honduras.

(4) Todavía con el sabor amargo de la derrota e intentando alguna explicación del fracaso de su partido, el 4 de diciembre de 1989 el aún presidente José Azcona reveló a la prensa que los empresarios privados habían contribuido a financiar la campaña callejista con 30 millones de lempiras, equivalentes en ese entonces a 15 millones de US \$, "con el propósito, dijo Azcona, de obtener durante el gobierno de éste mayores ganancias en sus negocios". Véase Diario Tiempo, 4 de diciembre de 1989, Tegucigalpa, Honduras.